Elecciones y gestión pública por proyectos

Libro blanco de OpenGov3

Edición 2.1 | 2 de noviembre de 2026 | Español

Victor BP • Propuesta de un modelo despersonalizado

Síntesis

OpenGov3 propone desarrollar un nuevo modelo de elecciones y gestión pública despersonalizado y centrado en proyectos. La propuesta vincula la elección democrática de prioridades y proyectos con la responsabilidad por su ejecución. Los equipos, los recursos, los compromisos y los resultados deben poder examinarse. La finalidad es fortalecer la autonomía de las personas y hacer que el ejercicio del poder sea verificable y responsable.

Este documento presenta el ciclo de referencia del modelo, sus valores, las decisiones institucionales aún abiertas y los criterios para formular, comparar, ejecutar y evaluar proyectos. La comprensión cívica, las fuentes y las herramientas de seguimiento apoyan este trabajo y la participación de quienes están de acuerdo, formulan críticas o proponen alternativas.

El modelo está en desarrollo. Las reglas de votación y representación, la selección de equipos, la asignación de recursos, los controles y la transición requieren su propio estudio y validación. Los instrumentos experimentales se examinan por separado. La propuesta no equivale a un sistema electoral en funcionamiento, a una reforma aprobada ni a un presupuesto nacional cerrado.

opengov3.com

Contenido

Lectura principal para ciudadanos, investigadores y profesionales de la gestión pública. Las referencias numeradas permiten consultar las fuentes. Los ejemplos identificados como hipotéticos sirven para explicar el método.

1 La propuesta de OpenGov3.....3

2 Valores y límites al poder.....5

3 Cómo examinar una propuesta.....6

4 Proyectos y compromisos verificables.....7

5 De la ejecución a la evaluación.....9

6 Gobernanza con participación e información.....11

7 Qué aprender de otras experiencias.....13

8 Una agenda de investigación para Brasil.....14

9 Instrumentos en investigación.....15

10 Desarrollo del modelo.....17

Glosario esencial.....19

Referencias.....19

Texto de referencia en portugués. Las ediciones en inglés, español, ruso y alemán corresponden a la misma versión y conservan los identificadores de las referencias.

1 La propuesta de OpenGov3

OpenGov3 propone un nuevo modelo de elecciones y gestión pública despersonalizado y centrado en proyectos. Su idea central es vincular la elección democrática de propuestas con la responsabilidad por su ejecución: problemas definidos, alternativas comparables, recursos explícitos, equipos identificados y resultados sujetos a verificación. Esta edición desarrolla la orientación presentada en el libro blanco de 2025. [2]

Despersonalizar significa reducir la dependencia de la elección política respecto del carisma, la fama y la lealtad a una figura pública. El debate debe centrarse en los problemas, las propuestas y la capacidad para realizar el trabajo. Las personas y las instituciones siguen identificadas, con responsabilidades, conflictos de interés y decisiones sujetos al examen público. La propuesta busca acercar el voto a lo que se hará y a cómo se le dará seguimiento.

Los textos fundacionales defienden la individualidad, la libertad de pensamiento, la responsabilidad, los servicios esenciales y el control del poder. Estos valores orientan el modelo y los criterios utilizados para examinarlo. Los ensayos conservan la voz y el contexto del autor; las opiniones históricas y las formulaciones filosóficas no se convierten, por ello, en evidencia empírica sobre grupos, países o políticas. [1]

Estado de la propuesta

Aspecto	Alcance en esta edición
Principios adoptados	Elección democrática por proyectos, responsabilidades identificadas, derechos, transparencia y revisión. Son compromisos normativos del modelo.
Diseño abierto	Reglas de voto y representación, composición de carteras, selección y sustitución de equipos, autoridad presupuestaria y transición institucional.
Evidencia disponible	Estudios de mecanismos específicos y ejemplos identificados expresamente como ficticios. La evidencia sobre una parte no demuestra la validez del sistema completo.
Validación pendiente	Comprensión e inclusión, integridad de los registros, viabilidad fiscal y jurídica, gobernanza y desempeño en aplicaciones delimitadas.

Cómo se organiza el modelo

El ciclo siguiente describe el funcionamiento previsto y organiza las cuestiones de diseño. Sus etapas deben examinarse en conjunto, porque la elección de un proyecto afecta a los recursos, las responsabilidades y los servicios.

- Proposición: presentar proyectos y carteras con el problema, la población destinataria, las alternativas, las entregas, las metas, los costos, las fuentes de recursos, los plazos, los riesgos y los equipos propuestos.
- Comparación: hacer visibles las diferencias de objetivos, calidad, alcance, costo completo, dependencias y consecuencias, con fuentes e incertidumbres accesibles al elector.
- Elección democrática: permitir que el elector compare y priorice proyectos conociendo los equipos y los planes de ejecución propuestos. La relación entre el voto, la representación y la autoridad para ejecutar depende de reglas aún por desarrollar.
- Asunción de responsabilidades: definir quién decide, financia, ejecuta, verifica y responde, con competencias y recursos acordes con los compromisos asumidos.
- Ejecución y seguimiento: registrar etapas, gastos, cambios, justificaciones y evidencias, preservando la continuidad de los servicios y la posibilidad de fiscalización.
- Evaluación y revisión: examinar las entregas y los efectos, escuchar las impugnaciones, corregir errores y hacer que el historial de decisiones y resultados sea útil para las decisiones posteriores.

Decisiones de diseño aún abiertas

La relación entre voto, autoridad y presupuesto es una tarea central en el desarrollo de OpenGov3. El modelo debe ofrecer respuestas públicas y comparables a las siguientes preguntas:

- ¿Cómo se relacionaría el voto por proyectos con la representación, los mandatos y los poderes de decisión?
- ¿Cómo seleccionar los equipos y distribuir las responsabilidades entre quienes proponen, financian, ejecutan y fiscalizan?
- ¿Cómo coordinar proyectos interdependientes, prioridades que compiten entre sí y límites presupuestarios, manteniendo los servicios permanentes?
- ¿Cómo asegurar una participación accesible, la protección de datos, la posibilidad de impugnación, los derechos y los controles del poder?
- ¿Cómo comparar reglas alternativas y planificar una transición compatible con las competencias institucionales y la continuidad de los servicios?

Comprensión cívica para desarrollar el modelo

Los textos, los estudios y las herramientas de OpenGov3 apoyan la elaboración y el examen de esta propuesta. La comprensión cívica ayuda a cada persona a comprender las instituciones, comparar proyectos, reconocer costos y consecuencias y exigir cuentas a quienes ejercen el poder. Una persona debe poder aprovechar este trabajo, discrepar del modelo y seguir plenamente incluida en la conversación. La comprensión y la participación no exigen coincidencia política con el autor.

La investigación, el seguimiento público y una eventual actuación partidaria tienen responsabilidades distintas. Una organización que compite por el poder debe afrontar conflictos de interés adicionales al evaluar a sus competidores. La hipótesis partidaria sigue abierta a investigación; no es una condición para construir o debatir el modelo ni una institución constituida por este documento.

La pregunta orientadora es: ¿esta decisión amplía la libertad real de las personas, respeta sus derechos y utiliza los recursos disponibles de manera responsable? La respuesta exige observar la vida individual, la convivencia social y la continuidad de los resultados.

2 Valores y límites al poder

Los valores orientan la elección de objetivos y deben explicitarse. La evidencia ayuda a examinar los medios, sus efectos y sus limitaciones. Un indicador favorable no elimina un conflicto de derechos ni determina por sí solo cuánto debe priorizar una sociedad cada objetivo.

Valor	Consecuencia para el proyecto
Dignidad individual	Los derechos y el valor humano no dependen de los ingresos, la productividad, la opinión o una puntuación.
Autonomía	Ampliar las condiciones reales para comprender, elegir, trabajar, aprender y cuidar.
Responsabilidad individual	Considerar las decisiones y sus consecuencias sin ignorar las condiciones de partida y los riesgos externos.
Responsabilidad pública	Exigir explicaciones y rendición de cuentas a quienes deciden sobre recursos y derechos.
Libertad de pensamiento	Permitir la duda, la crítica, el acceso a las fuentes y la revisión de convicciones.
Pluralismo	Tratar las diferencias de prioridades con respeto y argumentos examinables.
Democracia y límites al poder	Preservar la participación, la representación, los controles, los derechos y la alternancia.
Ética e impersonalidad	Aplicar los mismos criterios a aliados, financiadores, fundadores y adversarios.
Transparencia comprensible	Explicar las decisiones, el dinero y los resultados de forma verificable.
Respeto por los recursos escasos	Considerar el costo completo, las alternativas y las oportunidades sacrificadas.

Valor	Consecuencia para el proyecto
Iniciativa y competencia	Facilitar la creación y la entrada, sin confundir el emprendimiento con el privilegio.
Solidaridad y protección	Afrontar privaciones graves y apoyar también a quienes necesitan cuidados prolongados.
Aprendizaje y autocorrección	Revisar los instrumentos cuando la evidencia o la experiencia revelen fallas.
Largo plazo	Considerar la continuidad de los servicios, el medioambiente y las próximas generaciones.

La autonomía depende de relaciones, servicios e instituciones. La educación pública, la atención básica de salud accesible, la seguridad y la infraestructura son prioridades presentes en los textos de origen. La necesidad de apoyo permanente no reduce la dignidad de una persona. Incentivar la iniciativa económica también exige reconocer el trabajo asalariado, los cuidados, la ciencia y otras elecciones de vida. [1]

La eficiencia debe incluir la calidad, la distribución y el tiempo impuesto al ciudadano. Un procedimiento barato para la administración puede trasladar esperas, desplazamientos y riesgos a las familias. La evaluación debe mostrar esos costos y las alternativas disponibles. La legitimidad democrática y los derechos imponen límites a la búsqueda de resultados.

3 Cómo examinar una propuesta

La construcción del modelo electoral y la comparación de proyectos exigen identificar qué tipo de afirmación se está debatiendo. Esta distinción impide que una simulación se presente como una predicción cierta o que una preferencia política se oculte dentro de una fórmula.

Tipo de afirmación	Exigencia de análisis
Valor	Justificar el principio y reconocer los conflictos con otros valores.
Hecho observado	Informar la fuente, la definición, el período, la cobertura y la unidad.
Explicación causal	Examinar qué ocurriría probablemente sin la intervención.
Hipótesis	Explicitar el mecanismo esperado y una forma de ponerlo a prueba.
Elección	Mostrar las alternativas, las restricciones, los criterios y la autoridad responsable.

Ocho preguntas de trabajo

- ¿Qué problema se está resolviendo y cómo se identificó?
- ¿A quién afecta y qué diferencias de territorio, ingresos, edad o necesidad importan?
- ¿Qué ocurre actualmente y qué instituciones tienen competencia para actuar?
- ¿Cómo produciría el resultado el cambio previsto?
- ¿Qué evidencia sustenta esa expectativa y hasta dónde permite concluir?
- ¿Cuál es el costo de implantación, operación, mantenimiento, transición y riesgo?
- ¿Cuál es la mejor alternativa disponible, incluida la mejora de lo que existe?
- ¿Qué resultado o problema exigiría corregir, interrumpir o sustituir la intervención?

La comparación previa debe utilizar objetivos y restricciones equivalentes. Las propuestas que ofrecen servicios diferentes, atienden a públicos distintos u omiten gastos recurrentes no son directamente comparables. El Green Book ofrece una referencia metodológica para examinar alternativas, distribución de efectos e incertidumbre; su aplicación a Brasil exige datos y contexto propios. [3]

Una fuente y el alcance de una conclusión

Una ley permite consultar una norma; una página institucional, la descripción de un programa. Ninguna demuestra, por sí sola, una ejecución adecuada o un efecto causal. Una evaluación puede sustentar una conclusión en el contexto estudiado y aun así dejar dudas sobre otro territorio, período o escala. Una simulación revela las consecuencias de los supuestos adoptados.

Cada afirmación relevante debe conservar su fragmento de origen, fecha y ubicación. El registro debe distinguir el contenido explícito de la fuente, el cálculo reproducible, la interpretación y la información ausente. La ausencia de datos debe seguir siendo visible. No se deben completar el presupuesto, el plazo o la responsabilidad mediante inferencias no declaradas.

Una crítica útil identifica el punto de divergencia, la evidencia que podría resolverlo y lo que sigue siendo una elección de valores. La revisión puede concluir que corresponde mantener, modificar, probar, dejar abierto o abandonar un instrumento.

4 Proyectos y compromisos verificables

En el modelo propuesto, los proyectos deben presentarse como compromisos públicos verificables. Un compromiso público es una obligación o intención delimitada que puede vincularse a una fuente, a responsables y a condiciones de ejecución. Una obra, un servicio continuo y una reforma regulatoria requieren formas adecuadas de descripción y seguimiento. La organización por proyectos debe mantener visibles las obligaciones permanentes de operación, mantenimiento y atención.

La siguiente ficha permite comparar propuestas antes de la elección y hacer un seguimiento de los compromisos después. No completa vacíos de la fuente ni atribuye automáticamente a un agente el poder de cumplir el compromiso. Un parlamentario puede presentar una propuesta sin controlar su aprobación; un gobierno municipal puede depender de financiación o autorización de otro nivel de gobierno.

Campo	Información que se debe registrar
Problema	Necesidad identificada y diagnóstico de partida.
Personas y territorio	Público afectado, cobertura y diferencias relevantes.
Valor protegido	Finalidad y derechos implicados.
Alternativas	Opciones comparadas y justificación de la elección.
Compromiso	Entrega u obligación, alcance, meta y plazo cuando estén definidos.
Responsables	Quién decide, financia, ejecuta, verifica y responde.
Recursos	Costos iniciales y recurrentes, fuentes e incertidumbres.
Dependencias	Autorizaciones, personas, sistemas y otras entregas necesarias.
Evidencias	Documento original, datos, método y límites.
Resultados	Cambio esperado en la vida de las personas y forma de medirlo.
Seguimiento	Situación, hitos, desviaciones, justificaciones y medidas adoptadas.
Impugnación	Canal, procedimiento de respuesta e historial de correcciones.

Cuatro estados distintos

La propuesta identifica lo que se desea hacer. El compromiso asumido exige un responsable y condiciones definidas. La entrega registrada exige evidencia de ejecución. El resultado evaluado exige examinar el efecto producido, con un método y sus límites. Estos estados describen evidencias diferentes; no son un porcentaje automático de progreso.

Un compromiso puede cambiar, interrumpirse o perder sus condiciones de ejecución. El historial debe registrar el motivo y conservar las versiones anteriores. No encontrar evidencia de avance exige decir qué se buscó, en qué fuentes y hasta cuándo; eso no demuestra, por sí solo, inactividad, fraude o incumplimiento.

Comparar sin distorsionar

La unidad debe ser consistente. Dividir una promesa en diez elementos y otra en uno solo puede alterar artificialmente cualquier porcentaje de cumplimiento. Un futuro registro deberá publicar reglas para dividir, agrupar, excluir y vincular compromisos, además de comprobar si revisores independientes llegan a clasificaciones similares. El grado en que la documentación está completa y la calidad de una política son evaluaciones diferentes.

5 De la ejecución a la evaluación

Para que la elección de proyectos se traduzca en gestión, los compromisos necesitan competencia institucional, equipo, presupuesto, contratación cuando corresponda, datos, coordinación y mantenimiento. La cadena debe identificar quién controla cada etapa y qué decisiones dependen de terceros. La misma exigencia se aplica a la capacidad del propio OpenGov3 para mantener la información actualizada.

De la actividad al efecto

La actividad es el trabajo realizado; la entrega es el producto o servicio puesto a disposición; el resultado es el cambio observado; el impacto causal es la parte del cambio atribuible a la intervención. La evaluación debe planificarse desde el diseño y utilizar un método adecuado a la pregunta y al contexto. El Magenta Book distingue la evaluación de procesos, de impacto y del uso de los recursos, sin imponer un único método para todos los casos. [4]

El seguimiento debe conservar la situación de referencia, la definición del indicador, el denominador, la frecuencia y la calidad de los datos. Los cambios de clasificación y de población atendida deben aparecer en el historial. Las metas de volumen deben acompañarse de calidad, distribución y efectos no deseados, para no premiar una entrega que solo desplaza el problema.

Ejemplo hipotético de atención

Imagine un compromiso de reducir la mediana del tiempo de espera de 60 a 45 días en 12 meses, en una red ficticia de atención. Los valores son ilustrativos. La ficha tendría que definir qué solicitudes entran en la medición, cómo tratar las cancelaciones, quién sigue esperando, la fuente de los registros y la responsabilidad sobre cada etapa.

El cambio representa 15 días, o el 25% del valor inicial. Esto describe una variación del indicador. Para evaluar el servicio, también sería necesario observar la lista de espera aún abierta, los casos con mayor espera, la calidad y las diferencias entre grupos. Para atribuir la mejora a la intervención, se necesitaría una comparación adecuada y el análisis de otros cambios durante el período.

Si la meta se alcanza excluyendo casos difíciles, trasladando pacientes sin solución o modificando la definición de espera, el resultado no cumple el propósito. El protocolo debería prever una revisión ante esas señales y mantener visible el cambio de método. Ningún ahorro financiero se deriva automáticamente de la reducción de días.

El mismo compromiso desde la propuesta hasta la revisión

- Proponer y comparar: en el ejemplo de reducir la espera de 60 a 45 días, comparar la reorganización de la cola, la ampliación de capacidad y la mejora de las derivaciones. Declarar la población atendida y las necesidades que cada alternativa dejaría sin atender.
- Financiar: presentar implantación, operación, mantenimiento y contingencias en el mismo horizonte; identificar la fuente presupuestaria y la autorización necesaria. El ejemplo no contiene cifras de costes ni financiación confirmada. Esta carencia impide tratar la propuesta como un compromiso listo para ejecutarse.
- Asumir responsabilidades y ejecutar: identificar la autoridad de la red, el equipo gestor, quién contrata cuando sea necesario y quién verifica. La elección de la gestión, la selección de proveedores y la fiscalización tienen responsabilidades distintas; el apoyo electoral no autoriza automáticamente una contratación.
- Hacer seguimiento: publicar hitos de capacidad y atención, registros de la cola e importes contratados, aceptados y pagados en campos separados. Ninguna de esas cifras equivale, por sí sola, a avance físico o mejora de la atención.
- Modificar e impugnar: si se retrasa una dependencia, registrar la versión anterior, el motivo, las alternativas, el efecto sobre coste y plazo y la autoridad que decide. La impugnación debe recibir una respuesta fundamentada y permitir una revisión sin participación de quienes tengan conflictos de interés.
- Evaluar y decidir: al finalizar los 12 meses, contrastar la mediana con la cola abierta, los casos de mayor espera, la calidad y la distribución del acceso. Registrar si hay fundamento para mantener, corregir o interrumpir; la atribución causal exige la comparación descrita anteriormente.

Los papeles y procedimientos anteriores forman un diseño hipotético. La selección local de planes presentada en el sitio demuestra cómo comparar prioridades; no registra votos ni determina cómo convertir preferencias en autoridad y presupuesto. Ese vínculo sigue siendo una decisión institucional abierta.

Cuentas que deben mantenerse separadas

El beneficio social, el ahorro fiscal y el dinero disponible son magnitudes diferentes. El tiempo ahorrado puede tener valor social sin liberar efectivo. Un gasto evitado puede no convertirse en una

reducción presupuestaria. Una donación, un beneficio tributario que reduce la recaudación, un préstamo y un ingreso permanente tienen consecuencias distintas y deben aparecer por separado.

Una aplicación brasileña debe presentar tres perspectivas: resultado fiscal y fuentes de financiación; distribución entre personas y grupos; patrimonio, deuda y riesgos futuros. Deben incluirse los costos de transición, mantenimiento y administración. Las comparaciones a lo largo del tiempo deben declarar la moneda, el año de precios, la inflación, el horizonte y la tasa de descuento, cuando se utilice. Los supuestos inciertos exigen escenarios y análisis de sensibilidad. [3, 5]

La hipótesis de financiar nuevas políticas con eficiencia futura solo puede tratarse como recurso disponible después de demostrar el mecanismo, la escala, el plazo y la posibilidad de materialización. La edición actual no presenta una cuenta fiscal nacional cerrada ni convierte los beneficios esperados en una promesa de financiación.

6 Gobernanza con participación e información

El modelo debe definir cómo la elección democrática se transforma en autoridad para decidir, recursos para ejecutar y deber de rendir cuentas. Los ciudadanos, los proponentes, los equipos ejecutores, los financiadores, los órganos responsables y las instancias de control tienen funciones distintas. La selección de equipos y la atribución de poderes dependen de reglas públicas, competencias y controles aún por desarrollar.

El seguimiento, la evaluación y la auditoría deben producir información para decisiones justificadas. Los procedimientos para corregir proyectos, sustituir a los responsables o resolver conflictos deben prever una autoridad competente, criterios públicos, una respuesta de las partes involucradas y una revisión. Las metas y los indicadores informan estas decisiones; los derechos, las competencias y la legitimidad siguen siendo límites del diseño institucional.

En Brasil, el diseño debe respetar las competencias institucionales, los derechos y los principios de la administración pública. La Constitución, la Ley de Acceso a la Información y la Ley General de Protección de Datos son referencias del marco normativo; citarlas no certifica la legalidad de una implementación específica. [9, 10, 11]

Gobernanza del propio OpenGov3

La credibilidad del proyecto también depende de reglas aplicables a sus operadores. Una aplicación debe identificar quién selecciona los casos, interpreta las fuentes, aprueba los cambios y analiza los recursos de revisión. Cuando haya un conflicto de interés, la decisión requiere una revisión sin participación de la parte interesada y una justificación registrada.

Para un futuro seguimiento público, se propone separar la autoría del registro, la revisión y la decisión sobre impugnaciones. La separación debe ser proporcional al equipo disponible y declararse con honestidad. Los financiadores no deben poder comprar evaluaciones favorables, ocultar correcciones ni controlar clasificaciones que les interesen.

Una corrección sustancial debe permitir identificar el contenido anterior, la nueva redacción, la razón, la fuente y la fecha. Las diferencias de interpretación y los errores fácticos necesitan un tratamiento distinto. El contacto editorial publicado es OpenGov3@proton.me. Un registro público de correcciones, plazos de respuesta y revisión independiente solo deben anunciarse como operativos cuando tengan responsables y capacidad real.

Participación con influencia definida

Antes de una consulta, es necesario explicar qué decisión está abierta, quién puede participar, qué recursos están en disputa y qué límites existen ya. Debe haber una respuesta sobre las contribuciones aceptadas y rechazadas. Las directrices de la OECD enfatizan el diseño, la inclusión, la respuesta a las contribuciones y la evaluación del proceso. Una encuesta abierta no representa automáticamente a la población. [8]

La participación debe tener en cuenta a las personas con poco tiempo, conexión limitada, discapacidad o poca familiaridad digital. Cuando la decisión pública exija un alcance mayor, serán necesarias formas adecuadas de participación fuera de la interfaz. La autenticación de identidad, la representatividad y la legitimidad son problemas diferentes; resolver uno de ellos no resuelve los demás.

Transparencia y protección de datos

El diseño propuesto prioriza la publicación de lo necesario para comprender las decisiones y los recursos públicos, con protección de los datos personales. La finalidad, la base legal, la necesidad, la conservación, el acceso y la seguridad deben evaluarse antes de la recopilación. La información sensible no debe introducirse en registros públicos inmutables. La LGPD trata la finalidad, la necesidad, la seguridad y los derechos de los titulares. [11]

Las firmas, los sellos de tiempo y los historiales de cambios pueden ayudar a verificar la autoría y la integridad. No demuestran que una medición corresponda a la realidad. La infraestructura debe elegirse en función de la necesidad de verificación, el costo, la interoperabilidad, la corrección y la recuperación ante fallas. Blockchain sigue siendo una opción que debe compararse con soluciones más simples.

Verificar documentos y proteger el voto son problemas distintos. Un eventual sistema electoral tendría que especificar secreto del voto, elegibilidad, prevención de la coacción, verificabilidad, impugnación y recuperación, con examen independiente. Registrar algo en blockchain no resuelve esos requisitos ni demuestra una entrega. Esta edición no establece ningún protocolo de votación.

Acceso y experiencia de lectura

La interfaz debe ofrecer texto legible, navegación por teclado, foco visible, enlaces descriptivos y funcionamiento con ampliación. El movimiento debe ayudar a percibir una acción y respetar la preferencia por movimiento reducido. Las WCAG 2.2 orientan los requisitos de accesibilidad, pero la conformidad depende de la evaluación de la implementación. Las pruebas técnicas deben complementarse con lectores reales, incluidas las personas mayores. [12]

7 Qué aprender de otras experiencias

El desarrollo del modelo puede aprender de los mecanismos de participación, evaluación, información y gestión de otras experiencias. La unidad útil de comparación es el mecanismo y sus condiciones. Un país puede ofrecer una referencia de interoperabilidad; otro, de evaluación o participación. Esto no demuestra la superioridad de todo su régimen ni valida el conjunto de propuestas de OpenGov3. Las fuentes institucionales describen el funcionamiento declarado; los efectos requieren evidencia propia.

Reino Unido y Nueva Zelanda

El Green Book de 2026 orienta la comparación de alternativas; el Magenta Book actualizado en 2026 orienta la evaluación. El CBAx, del Tesoro de Nueva Zelanda, ofrece una hoja de cálculo y una base de valores para apoyar los análisis de costos y beneficios. El propio Tesoro considera también los efectos no monetizados, los riesgos de implementación y las restricciones fiscales. La lección aplicable es explicitar los supuestos y hacer que el juicio pueda examinarse. Los valores monetarios de otro país requieren adaptación antes de cualquier uso brasileño. [3, 4, 5]

Estonia e intercambio de datos

X-Road ilustra una capa de intercambio entre sistemas, con firmas, sellos de tiempo y registros. La aclaración técnica del NIIS de 2018 distingue esta arquitectura de blockchain. La lección es separar interoperabilidad, integridad y elección de infraestructura. La referencia no demuestra la veracidad de los datos de origen ni elimina la necesidad de gobernanza, estándares y capacidad operativa. [6]

Singapur y servicios digitales

La documentación de Singpass distingue la autenticación, el intercambio de datos seleccionados a través de Myinfo con consentimiento y la firma digital. Esta separación ayuda a formular requisitos con precisión. No demuestra, por sí sola, la seguridad de una votación, la representatividad o la adecuación jurídica en Brasil. La adaptación depende de reglas, protección de datos, acceso y alternativas para quienes no pueden utilizar el canal digital. [7]

Resultados y límites para orientar el diseño

Ceará y Sobral: el análisis histórico relaciona los avances educativos con un conjunto de reformas. El caso orienta la investigación de capacidad y coordinación; no aísla un incentivo ni valida el modelo electoral. [15]

Togo: el experimento de formación en iniciativa personal encontró beneficios persistentes, con diferencias por género a largo plazo. El seguimiento y la distribución de los efectos deben incorporarse a la evaluación. [16]

Benín: la asistencia aumentó la formalización sin elevar ventas ni beneficios en el estudio. Los registros y la actividad económica requieren medidas distintas; deben contrastarse costes y beneficios. [17]

Estos casos no estiman el efecto de adoptar OpenGov3. La selección ilustra cuestiones de diseño, no una clasificación de países. Los costes y la transferibilidad requieren un examen propio. Las fichas ampliadas, los métodos y las carencias están en https://opengov3.com/es/paises; el estudio comparado permanece en https://opengov3.com/es/estudos/estado-social.

El estudio ampliado de OpenGov3 sobre Estado social, servicios y financiación conserva otros casos y sus referencias en opengov3.com/estudos. La elección de una aplicación brasileña debe considerar las diferencias demográficas, fiscales, federativas y administrativas. Una práctica prometedora debe compararse con alternativas y fallas, además de los casos favorables.

8 Una agenda de investigación para Brasil

La agenda brasileña ofrece un ámbito para desarrollar y comparar proyectos. La orientación aquí examinada combina protección esencial, autonomía, iniciativa económica, competencia y responsabilidad pública. Las diez líneas siguientes organizan preguntas de investigación. No representan un paquete nacional con costos, responsables y efectos ya demostrados. Cada intervención necesita diagnóstico, competencia institucional, alternativas, financiación, transición y evaluación. Los proyectos que compiten entre sí deben tener espacio para presentar otras prioridades y alternativas.

- Educación: aprendizaje, pensamiento crítico y vías de formación que amplíen oportunidades.
- Salud: acceso efectivo, atención primaria, continuidad de los cuidados y calidad percibida y medida.
- Cuidados: condiciones para quienes reciben apoyo y para quienes cuidan, incluso en situaciones permanentes.
- Protección de ingresos: reglas comprensibles, cobertura adecuada y transiciones que eviten pérdidas abruptas.
- Trabajo y protección portable: protección compatible con cambios de vínculo laboral y trayectorias diversas.
- Emprendimiento y productividad: entrada, competencia, previsibilidad y reducción de obstáculos innecesarios.
- Seguridad y justicia: prevención, investigación, protección de derechos y exigencia de responsabilidades dentro de la ley.
- Infraestructura, vivienda y territorio: calidad, acceso, mantenimiento y coordinación entre intervenciones.
- Finanzas públicas, patrimonio y compras: costo completo, uso de activos, contratación y riesgos a largo plazo.
- Gobierno comprensible e interoperable: información legible, servicios accesibles e intercambio adecuado de datos.

Garantizar, financiar, prestar y regular o evaluar son funciones que deben distinguirse. Los esquemas públicos, privados o comunitarios deben examinarse según el acceso, la calidad, los derechos, los incentivos y la capacidad de control. La elección de un prestador no pone fin a la responsabilidad pública por la finalidad.

La secuencia de investigación debe comenzar por problemas delimitados e instituciones existentes. Antes de proponer nuevos organismos, se debe comprobar si un cambio de proceso, coordinación o capacidad resuelve el problema. Antes de ampliar prestaciones, se deben explicitar la cobertura, su retirada, la financiación y los efectos distributivos. Los porcentajes ilustrativos y las analogías internacionales no sustituyen estas verificaciones.

9 Instrumentos en investigación

Los instrumentos de esta sección son posibilidades para apoyar la elección y la gestión por proyectos. Cada uno necesita sus propios criterios de utilidad, viabilidad y evaluación. El historial de ejecución, por ejemplo, puede presentarse sin una puntuación agregada. El desarrollo del modelo debe permitir comparar, corregir o abandonar los instrumentos que no cumplan su propósito.

Historial de ejecución y Score

Plazo, costo, calidad, transparencia, impacto, satisfacción y cumplimiento son dimensiones útiles de análisis. El original presenta ponderaciones divergentes entre el texto y la tabla para impacto y cumplimiento. Esta edición no elige silenciosamente una de las versiones ni establece una fórmula validada. [2]

La propuesta inicial es presentar dimensiones separadas, contexto, recursos, responsabilidad efectiva y datos faltantes. Una puntuación agregada solo sería justificable después de pruebas de robustez, sensibilidad y comparabilidad. La vulneración de derechos o el fraude demostrado no deben compensarse con un buen desempeño en otro indicador. Cualquier consecuencia necesita una regla propia, revisión y derecho de respuesta. No se propone una puntuación general de ciudadanía o valor humano.

Rebate Social y cofinanciación

El Rebate Social es una hipótesis que relaciona la cofinanciación privada con beneficios asociados a entregas y ahorros verificados. El análisis debe distinguir al financiador, al beneficiario, al operador y a la autoridad que concede el beneficio. Debe abordar la pérdida de recaudación, la adicionalidad, la distribución, los conflictos de interés, el riesgo de captura y la continuidad de los servicios. [2]

Un cálculo aritmético correcto no demuestra que la base utilizada sea real, que el ahorro haya sido causado por el proyecto o que pueda financiar el beneficio. Los porcentajes y ejemplos del original conservan su carácter histórico. Antes de un piloto serían necesarios modelos fiscales y distributivos, una comparación con alternativas y un análisis jurídico específico. Una donación no debe comprar privilegios regulatorios ni influencia sobre la evaluación.

Futarquía y mercados de decisión

En la propuesta de Robin Hanson, la elección política define objetivos y una medida de bienestar; los mercados condicionales comparan las consecuencias esperadas de las alternativas. La comparación relevante implica el valor esperado de esa medida. La probabilidad de superar un umbral específico es una pregunta diferente. Ambos escenarios son condicionales; el escenario no elegido no se convierte en un resultado observado. El diseño analizado por Hanson incluye límites constitucionales. [13]

Utilizar una predicción para decidir puede alterar los incentivos de quienes predicen. Chen y sus coautores demuestran este problema y estudian condiciones de compatibilidad de incentivos en un modelo formal de mercados de decisión. El resultado no demuestra la inviabilidad de toda futarquía ni garantiza que el dinero produzca información correcta en cualquier diseño. [14]

Para OpenGov3, la vía de investigación consiste en evaluar primero las predicciones consultivas, los criterios de resolución, la participación, la liquidez, la manipulación y los conflictos de interés. Los derechos fundamentales y la legitimidad no deben depender automáticamente de los precios de mercado. La futarquía, la priorización de proyectos y la selección de ejecutores son mecanismos distintos; el Score y el Rebate Social no son propuestas atribuibles a Hanson.

Arquitectura institucional y tecnología

El documento de origen asocia el modelo con una estructura de 16 ministerios, la reorganización de mandatos y una aplicación de votación y seguimiento. Estos diseños específicos siguen sujetos a comparación y revisión. La propuesta central de elecciones y gestión por proyectos debe desarrollarse con un análisis de competencias, coordinación, transición, costo, representación y controles. La misma disciplina se aplica a blockchain: elegir una infraestructura solo después de definir el problema que debe resolver. [2]

10 Desarrollo del modelo

El camino propuesto articula la investigación del diseño electoral, la organización del seguimiento público y la comprensión cívica. El desarrollo debe explicitar las reglas posibles y las condiciones para compararlas, comprobar su comprensión y examinar sus consecuencias. Los pilotos de información y seguimiento pueden ayudar a desarrollar partes del modelo, con su alcance y sus límites declarados.

Etapa	Evidencia necesaria para avanzar
Especificación del modelo	Relación entre voto, representación, proyectos, equipos, presupuesto y controles descrita; decisiones abiertas y alternativas identificadas.
Comparación y simulación	Reglas candidatas examinadas en escenarios con restricciones, interdependencias, riesgos de exclusión y concentración de poder; supuestos y límites publicados.
Pilotos de información y seguimiento	Alcance limitado, fuentes, responsables, costos y criterios de revisión definidos, sin ejercer autoridad electoral; registros y verificaciones reproducibles.
Evaluación y revisión	Comprensión, acceso, utilidad, errores, divergencias, costos e incentivos examinados antes de ampliar el alcance.
Aplicación institucional	Competencias, reglas públicas, legitimidad, recursos, controles y transición definidos por las instancias responsables.

El protocolo de cada prueba deberá definir criterios de evaluación y revisión antes de observar los resultados. Los datos insuficientes, las clasificaciones inconsistentes, las barreras a la participación,

un costo de mantenimiento incompatible o los errores que perjudiquen a personas exigen reducir el alcance, corregir el método o interrumpir la etapa. Las cifras de visitas y documentos procesados no sustituyen la calidad, la comprensión y la verificabilidad.

Un piloto informativo exitoso demuestra únicamente lo que se ha probado efectivamente. La adopción de reglas electorales o de gestión exige una evaluación institucional propia y decisiones de las instancias competentes. La responsabilidad de OpenGov3 es hacer que su modelo sea comprensible, abierto a la crítica y sujeto a revisión, manteniendo vinculada la elección de proyectos con la capacidad de ejecutar y la rendición de cuentas.

Protocolo mínimo del primer piloto informativo

- Delimitar antes de comenzar: elegir un problema, territorio, periodo y conjunto de compromisos; registrar criterios de inclusión y exclusión. El piloto organiza información y seguimiento, sin ejercer autoridad electoral ni prestar servicios.
- Asignar funciones: identificar coordinación, autoría de los registros, revisión y decisión sobre impugnaciones; declarar financiación, conflictos y sustituciones. Los nombres, la disponibilidad y el plazo de respuesta deben definirse antes de abrir la atención.
- Fijar datos y reglas: publicar el diccionario de campos, las fuentes, la fecha de corte y el tratamiento de las ausencias. Cada clasificación debe remitir al pasaje o registro de origen, conservando versiones y correcciones. Los datos personales solo se incorporan cuando son necesarios y están protegidos.
- Probar una revisión reproducible: distintos revisores aplican las reglas al mismo conjunto de registros; medir concordancia, divergencias y correcciones. Definir de antemano el nivel aceptable y cómo resolver desacuerdos; esta edición no inventa un umbral validado.
- Probar comprensión y acceso: pedir a lectores con perfiles diversos que localicen responsable, coste, plazo, evidencia e incertidumbre y distingan propuesta, entrega y resultado. Registrar barreras, incluidas las encontradas con ampliación, teclado y tecnologías de apoyo.
- Controlar coste y daño: registrar horas de trabajo, gastos, retrasos y coste de actualización por registro. Un error material que perjudique a alguien exige corrección y revisión inmediatas; un fallo de privacidad exige contener la exposición y reevaluar el alcance.
- Decidir con un registro público: continuar solo con las condiciones previamente definidas cumplidas y los fallos materiales tratados. La divergencia persistente, la exclusión, los datos insuficientes o un mantenimiento inviable exigen corregir, reducir o interrumpir. Publicar la decisión, sus motivos y limitaciones.

Todavía deben definirse lugar, equipo, muestra, presupuesto, calendario y umbrales de aceptación. El protocolo especifica cómo preparar el piloto, no anuncia su funcionamiento. Su eventual éxito

respaldará conclusiones sobre información y seguimiento en el alcance probado; la adopción electoral y la gestión pública exigen validación propia.

Nota de esta edición

La edición 2.1 añade el cuadro del estado de la propuesta, conecta el ejemplo de atención con las responsabilidades y decisiones de ejecución, detalla el piloto informativo e incorpora tres referencias añadidas desde la edición 2.0. Conserva la estructura y las salvedades sobre Score, Rebate Social y futarquía, sin establecer reglas electorales ni un plan fiscal nacional. Las ediciones 2.0 y 1.20.15 y los ensayos siguen disponibles como registros históricos.

El portugués es el texto de referencia. El inglés, el español, el ruso y el alemán conservan la versión, la estructura, los ejemplos y la numeración de las fuentes. Los cambios futuros de contenido deben registrarse en la edición y reflejarse en las traducciones correspondientes.

Glosario esencial

Despersonalización política. Organización de la elección y la exigencia de responsabilidades en torno a propuestas y criterios públicos, manteniendo a las personas y a las instituciones identificadas y responsables.

Cartera de proyectos. Conjunto de proyectos coordinados según objetivos, recursos, dependencias y responsabilidades.

Compromiso público. Obligación o intención delimitada, vinculable a una fuente, responsables y condiciones de ejecución.

Contrafactual. Situación que ocurriría sin la intervención, estimada mediante un método adecuado.

Resultado observado. Cambio medido que todavía puede tener múltiples causas.

Impacto causal. Cambio atribuible a la intervención, dentro de los límites de la evaluación.

Adicionalidad. Parte del efecto que no ocurriría sin el mecanismo analizado.

Interoperabilidad. Capacidad de los sistemas para intercambiar y utilizar información de forma adecuada.

Pista de auditoría. Historial que permite examinar el origen, los cambios, las decisiones y los responsables.

Futarquía. Propuesta que combina la definición política de objetivos y mercados condicionales para comparar consecuencias esperadas.

Referencias

Las referencias heredadas de la edición 2.0 conservan su fecha de consulta del 22 de octubre de 2026. Las tres referencias añadidas en esta edición se comprobaron el 2 de noviembre de 2026. Las fuentes

respaldan las afirmaciones indicadas; no validan OpenGov3 como sistema completo. Los títulos bibliográficos permanecen en su idioma original.

[1] Victor BP. Textos fundadores do OpenGov3. Archivo del autor. Sem o indivíduo não temos uma sociedade; Premissas para uma sociedade minimamente saudável; Que Nasça Logo Uma Ideologia Livre; Como seria um Governo ideal. Ensayos, con el contexto y la voz del autor preservados. opengov3.com.

[2] Victor BP. OpenGov3 Whitepaper v1.20.15. 27 de octubre de 2025. Documento de origen. Secciones 2, 8, 11, 12 y 14. Versión conservada por separado. opengov3.com.

[3] HM Treasury. The Green Book. 2026. Evaluación previa de alternativas, costos, beneficios, distribución e incertidumbre. Capítulos 1, 6, 7 y 9. www.gov.uk.

[4] HM Treasury e Evaluation Task Force. Magenta Book Central Government guidance on evaluation. 2026. Edición actualizada en mayo. Planificación de la evaluación, procesos, impacto y uso de los recursos. Capítulos 1 a 3. www.gov.uk.

[5] The Treasury New Zealand. The Treasury's CBAx Tool. Presupuesto 2026. Modelo y base de valores. Sección Using CBAx to inform decision-making; versión publicada en noviembre de 2025. www.treasury.govt.nz.

[6] Petteri Kivimäki e NIIS. There is no blockchain technology in X-Road. 2018. Aclaración técnica del 26 de abril. Secciones X-Road e Is X-Road based on blockchain. Descripción de la arquitectura en el momento de la publicación. www.niis.org.

[7] GovTech Singapore. Singpass Developer Portal. Sin fecha de publicación indicada. Documentación funcional de Login, Myinfo y Sign. developer.singpass.gov.sg.

[8] OECD. OECD Guidelines for Citizen Participation Processes. 2022. Diseño, inclusión, implementación, respuesta a las contribuciones y evaluación de la participación. DOI 10.1787/f765caf6-en. doi.org.

[9] Brasil. Constituição da República Federativa do Brasil. 1988. Texto con modificaciones. Artículos 1, 2, 5 y 37. Derechos, organización del poder y principios de la administración pública. www.planalto.gov.br.

[10] Brasil. Lei 12.527 Lei de Acesso à Informação. 2011. Texto con modificaciones. Artículos 3, 5, 6 y 7. Acceso, transparencia y protección de la información. www.planalto.gov.br.

[11] Brasil. Lei 13.709 Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. 2018. Texto con modificaciones. Artículos 6, 18, 23 y 46. Principios, derechos, poder público y seguridad. www.planalto.gov.br.

[12] W3C. Web Content Accessibility Guidelines WCAG 2.2. 2023 con actualización de 2024. Navegación, foco, tamaño del texto e interacción. Consultar la norma no equivale a una certificación de conformidad. www.w3.org.

[13] Robin Hanson. Shall We Vote on Values, But Bet on Beliefs?. 2013. Journal of Political Philosophy, 21(2), 151 a 178. DOI 10.1111/jopp.12008. Manuscrito del autor, secciones IV, VII, VIII y IX. mason.gmu.edu.

[14] Yiling Chen, Ian Kash, Mike Ruberry e Victor Shnayder. Decision Markets With Good Incentives. 2011. WINE 2011, LNCS 7090, 72 a 83. DOI 10.1007/978-3-642-25510-6_7. Introducción y sección 4. www.microsoft.com.

[15] André Loureiro, Louisee Cruz, Ildo Lautharte e David K. Evans. The State of Ceara in Brazil is a Role Model for Reducing Learning Poverty. 2020. Banco Mundial. Análisis histórico de las reformas educativas y sus complementariedades; no es una evaluación causal aislada de un incentivo. documents1.worldbank.org.

[16] Francisco Campos, Michael Frese, Leonardo Iacovone, Hillary C. Johnson, David McKenzie e Mona Mensmann. Long-Term and Lasting Impacts of Personal Initiative Training on Entrepreneurial Success. 2025. American Economic Review: Insights. DOI 10.1257/aeri.20240581. Resumen y metadatos de la publicación; efectos a largo plazo y diferencias por género. www.aeaweb.org.

[17] Najy Benhassine, David McKenzie, Victor Pouliquen e Massimiliano Santini. Does inducing informal firms to formalize make sense? Experimental evidence from Benin. 2018. Journal of Public Economics. DOI 10.1016/j.jpubeco.2017.11.004. Resumen e introducción; formalización, desempeño y coste de la asistencia. cepr.org.